

La *changarrización* de la ciencia

Juan Jacobo Schmitter-Soto

La ironía de la situación daría risa si no fuera tan trágica.

Hace algunos meses, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, propuso a Felipe Calderón un rescate para la ciencia y la tecnología, con el fin de "blindar a la política científica y tecnológica frente a la crisis".

Según una nota del periodista Emir Olivares aparecida en el periódico *La Jornada* en junio de 2009, Rosaura Ruiz habló de una reforma fiscal progresiva y la renegociación del pago del Fobaproa para financiar dicho rescate. Como ejemplo, la epidemia de influenza (asunto de *epimiedología* o *epimediología*, diría Elba Esther Gordillo, la líder *moral* del Sindicato Nacional de Trabajadores ¡de la Educación!) puso al desnudo "la vulnerabilidad" del sistema nacional de salud, derivación directa del rezago de la investigación científica mexicana.

Dijo la doctora Ruiz: "El rescate de la ciencia y la tecnología es financieramente viable. En el bancario y el carretero, el Estado mexicano destinó, entre

1995 y 2008, recursos públicos por 453 mil millones de pesos. Es decir, éstos le han costado al país erogaciones anuales equivalentes a 0.59% del Producto Interno Bruto (PIB). En ese mismo periodo, a ciencia y tecnología se le destinó cada año un promedio de 0.37% del PIB".

Omitió mencionar que 2006, cuando finalizó el sexenio de Vicente Fox y comenzó el gobierno de Calderón, fue el peor año para la ciencia mexicana en el último cuarto de siglo.

Las cifras hablan solas. Durante su periodo presidencial, Carlos Salinas nos integró a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de modo que debería ser adecuada la comparación con otros países miembros: en términos del porcentaje de su PIB, México destina a la ciencia y la tecnología menos de la mitad de lo que les destina España, menos de una cuarta parte que Canadá, menos de una sexta parte que Estados Unidos.

En términos de investigadores, por cada 10,000 habitantes económicamente activos, contamos con una sexta parte de los que tiene España, un 10% de los que

tiene Canadá, 11 veces menos que Estados Unidos.

¿Es más adecuado compararnos con América Latina? México invierte en ciencia y tecnología (como porcentaje del PIB) menos de la mitad de lo que invierte Brasil, 60% de lo que invierte Chile, 90% de lo que invierte Argentina (un país de 40 millones de habitantes; en México somos 110 millones, sin contar nuestros emigrados).

La Ley de Ciencia y Tecnología vigente desde 2001 obligaba al Estado mexicano a destinar un presupuesto público para investigación científica equivalente a 1% del PIB. Rosaura Ruiz no estaba pidiendo nada que no estuviera previsto legalmente.

La ironía es que a su propuesta, revolucionaria y sensata, se le respondió con una bofetada. En este 2009 la ciencia mexicana ha sido golpeada como nunca antes.

De acuerdo con unos "lineamientos de austeridad" dados a conocer en el Diario Oficial de la Federación y firmados por Dionisio Pérez-Jácome, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda

Uno esperaría que las grandes empresas destinaran fondos para investigación, no que los recibieran. Pero bueno, uno también esperaría que los rescates fueran para los niños que mueren de desnutrición en Chiapas, no para los banqueros.

da y Crédito Público, todos los centros de investigación federales –de hecho todas las dependencias federales– tendrían que realizar un recorte al “capítulo 1000” (salarios) del orden del 3%. En algunos casos, como el de ECOSUR, la forma de enfrentar esa situación podría haber consistido en una merma a los estímulos por productividad de hasta un 70%.

Ante la crisis, esperábamos recortes en el gasto corriente: menos viáticos o ahorros en luz y papelería, por ejemplo. Nadie anticipó un recorte directo al ingreso de los trabajadores de la ciencia. Finalmente, se realizaron gestiones que revirtieron la situación por el momento, pero no hay garantía de que el escenario no se presente de nuevo.

En paralelo, leemos en el sitio electrónico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que, so pretexto del “Fondo Nuevo para la Ciencia y la Tecnología”, se aprobaron apoyos para empresas como Barcel (más de 22 millones y medio de pesos), Gigante (casi 10 millones y medio) e incluso financiamiento a transnacionales como Rohm y Haas (dedicada a la elaboración de químicos para la industria y otros productos).

En comparación, un “megaproyecto” de estudios sobre el cambio climático global –un tema sin duda de mayor relevancia que lo que una empresa de botanas pueda explorar–, presentado recientemente por diversas instituciones de investigación, está pidiendo 29 millones de pesos.

Uno esperaría que las grandes empresas destinaran fondos para investigación, no que los recibieran. Pero bueno, uno también esperaría que los rescates fueran para los niños que mueren de desnutrición en Chiapas, no para los banqueros; para la educación, la ciencia y la cultura, no para una guerra insensata contra el narcotráfico.

De unos sexenios para acá, todo rescate, fomento, apoyo, desarrollo, debe referirse a los empresarios, casi por definición. El ahorcamiento a los centros de investigación parece tener la intención de orillarnos a convertirnos en vendedores de servicios, en entes “vinculados” con la iniciativa privada. El problema es que el manejo sustentable de las áreas naturales protegidas, los efectos del cambio climático, el bienestar de las etnias de Chiapas, el empoderamiento de las mujeres y otros temas de investigación de

ECOSUR, por dar un ejemplo, no son comercializables. Para sobrevivir, algunos centros tendrían que “cambiar de giro”: encontrar algo que vender y

convertirse en un *changarro*, como parte de la iniciativa privada (IP).

¿Todos somos IP?

“Iniciativa privada: casi todos formamos parte de ella”. Tal era el estribillo de una campaña de la iniciativa privada para la iniciativa privada, allá por los años ochenta.

Casí. Los publicistas de marras querían que pensáramos en nuestra vecina septuagenaria, doña Ligia, que atiende en solitario su pequeño tendajón mixto. Si doña Ligia es IP, pues sí, casi todos somos IP.

Y nos dicen que el castrismo de Cuba es inhumano porque prohíbe la IP, y nos ponen de ejemplo que allá no se vale ni siquiera poner un *changarro* para reparar licuadoras.

Estrictamente es cierto: doña Ligia y el cubano que compone electrodomésticos con piezas hechizas son IP. Sin embargo, el “concepto IP” en la mente popular remite más bien a un gordo enlevitado con sombrero de copa y una bolsa igual de gorda con un signo de pesos en la mano. O tal vez a aquel personaje de Abel Quezada que tenía un anillo de diamantes en la nariz. O a Slim. O a Servitje. O a Vergara. No a doña Ligia ni a Manolito el de Mafalda. Los micro y pequeños empresarios, hasta los medianos, son claramente *pueblo*. Pero ¿comparten las preocupaciones de los grandes empresarios? ¿*Casi todos* formamos parte de *esa* IP, la que realmente decide las cosas en este país?

Una compañera ha argumentado en la prensa local en contra de esta “satanización” de la IP, dando el ejemplo de la Finca Irlanda, la cual también ha sido beneficiada por el Fondo Nuevo para la Ciencia y la Tecnología. No le falta razón: es claro que la IP tiene mucho que aportar, y de-



bería hacerlo, para contribuir a solucionar los problemas de la frontera sur, desde la conservación de la biodiversidad hasta el desarrollo comunitario. No en balde empresarios como don Walter Peters, dueño de la Finca Irlanda, han sido reconocidos por ECOSUR mismo, por su labor en favor del ambiente y en beneficio de la comunidad.

Sin embargo, don Walter ha sido el prototipo del empresario generoso, que incluso da más de lo que recibe a la comunidad y al ambiente. ¿Es así en el caso, digamos de Barcel y Bimbo y su probable contribución al deterioro nutricional de los niños mexicanos?

O en el caso de la banca. ¿Cuánto pagamos por el rescate bancario, y quiénes se beneficiaron de él? ¿Doña Ligia?

O en el caso de quienes operaron las carreteras privatizadas. ¿Cuánto pagamos por el rescate carretero? Al viajar desde el sureste a la Ciudad de México por tierra, se paga una cantidad seria por concepto de casetas, ¿cómo nos benefició ese rescate a la IP?

¿Cuánto cuestan a las mujeres mexicanas, en términos de sufrimiento y explotación, las maquiladoras?

¿Cuánto nos cuesta la restauración de playas en Cancún, las playas que se llevaron los huracanes, con algo de ayuda de las escolleras ilegales? ¿Realmente beneficiará eso al pueblo cancanense, o sólo a los empresarios hoteleros, los mismos que han arrasado manglares impunemente?



Taller de educación ambiental

En Quintana Roo se aprobó cobrarle a los cruceros y empresas asociadas un impuesto mínimo. La condición para aceptarlo: que lo recaudado se invirtiera en la infraestructura de los mismos muelles de crucero. ¿Se beneficiaron las comunidades mayas del Estado?

Se podría responder: sí, se beneficiaron, porque sus jóvenes ya tienen empleo... no en su comunidad, sino en Playa del Carmen o Cancún, pero al menos es un empleo en Quintana Roo, no allende la frontera norte. ¿Qué clase de empleo? Normalmente, de albañil eventual; con suerte, de personal de limpieza en un megahotel. Incluso suponiendo sin conceder que no haya transculturación, ¿esa

clase de empleos fomentan el desarrollo social?

Nos enfrentamos a la *changarrización* de la ciencia. Es algo congruente con la idea de que casi todos formamos parte de la *iniciativa privada*, no de la *sociedad civil* y mucho menos del *pueblo*, ese anacrónico concepto. ☹

Juan Jacobo Schmitter es investigador del Área de Conservación de la Biodiversidad, ECOSUR Chetumal (jschmitt@ecosur.mx).

ENTÉRATE



La Finca Irlanda, en el Soconusco, Chiapas, es una empresa dedicada a la producción de café con sistemas agroforestales (también cacao, cardamomo y miel). Hay énfasis en la conservación y propagación de flora y fauna silvestre, además de acciones de capacitación y revisión de aspectos sociales.

Durante la década de 1960, en el apogeo de la revolución verde, los dueños de la finca rechazaron la intensificación de agroquímicos y optaron por un "sistema biológico dinámico". En este sistema, los nutrientes requeridos para el cultivo proceden del propio autoabastecimiento, por lo que es primordial el reciclaje de todos los desechos orgánicos de la plantación y de sus habitantes. Un ejemplo práctico es el llamado biodigestor: un recipiente en el que los desechos orgánicos del ganado se transforman en gas para cocina y en abono, reduciendo así el consumo de leña en la preparación de alimentos, con la consecuente disminución de árboles talados y de humo y bióxido de carbono al cocinar. Además se aprovechan los desechos sólidos de los animales, al tiempo que se produce biofertilizante y alimento para incrementar el cultivo de lombrices que mejoran la calidad del suelo.